

de edad, casado, con cinco hijos y enfermo de enajenacion mental, cuyas circunstancias, siendo excepciones al servicio de las armas, concedidas por la ley de 17 de Mayo último, hacen que la medida del Gobernador sea una violacion á la garantía que otorga el artículo 5º de la Constitución de la República. Visto el informe de la autoridad responsable: las pruebas rendidas: los pedimentos del Promotor fiscal, el alegato del defensor de Vega y la sentencia del juez 1º de Distrito antes citado, en la que concede el amparo pretendido: Considerando, que se han justificado en autos las razones del quejoso para solicitarlo, sin que obste que se presentó, supuesta la enfermedad epiléptica de que padece, que le origina por intervalos enajenacion mental, y la resistencia que estando en aptitud ha manifestado para servir con aquel carácter.

Con apoyo de la ley de 2 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: por sus propios legales fundamentos se confirma la sentencia del juez 1º de Distrito de México, pronunciada en 31 de Julio próximo pasado en la que se declara: que la justicia de la Union ampara y protege á Francisco Vega contra la resolucion que motivó este recurso.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzdo de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CO. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis Mº Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Agosto 30 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, por varios vecinos del pueblo de San Gabriel, contra el alcalde municipal de Zempoala, por la adjudicacion que hizo á D. Gabriel Mateos de un magueyal de los quejosos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice: que los vecinos del pueblo de San Gabriel, jurisdiccion de la municipalidad de Zempoala, han ocurrido á vd. por medio de su apoderado, pidiendo se les proteja y ampare contra una providencia del alcalde de aquella, por la que se enagenó al C. Gabriel Mateos en 2 de Setiembre de 1857, un magueyal de la propiedad de los quejosos, y con cuyo acto dicen que se han violado en ellos las garantías que les aseguran los artículos 16 y 27 de la Carta fundamental.

En efecto: la providencia á que se refieren los quejosos es atentatoria, pues los títulos que corren agregados al expediente de la foja 3 á la 23, apoyan suficientemente lo alegado por ellos. En dichos documentos consta, que el magueyal les pertenecía desde el año de 1813, por el título legítimo de compra y venta, sin que hasta la fecha, en que han sido despojados, haya pertenecido á corporacion alguna; y aun cuando fué voluntad de todos los dueños, que los productos se dedicaran á un objeto piadoso, sin embargo, la posesion y propiedad no ha mudado en manera alguna, pues cada año se encargaba de conservarla á uno de los mismos vecinos, siendo el objeto nada menos, el de que, en ningun tiempo se alegara otro derecho que el de los verdaderos dueños.

Siendo, pues, tan clara la justicia que los solicitantes alegan, y tan terminantes

las circulares de que se hace mencion á fojas 25, el suscrito Promotor es de opinion, que se conceda el amparo á los CC. José Félix Mateos, Feliciano Reyes y Antonio Zavala, en quienes se han violado las garantías que les aseguran los artículos 16 y 27 del Pacto Federal.

Pachuca, Junio 7 de 1872.—(Firmado.) *Macedonio Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Julio 29 de 1872.—*F. Briseño*, secretario.

SENTENCIA del C. juez.

Pachuca, Julio 24 de 1872.—Vistos:

1º El escrito del C. Jesus D. Osorno en representacion de varios vecinos de San Gabriel del municipio de Zempoala, pidiendo amparo y proteccion contra el C. presidente municipal por haber adjudicado al C. Gabriel Mateos, en 2 de Setiembre de 1857, un magueyal que los quejosos aseguran pertenecer á sus bienes comunales, alegando que aquella providencia viola en sus personas las garantías que otorga el Código fundamental en sus artículos 16 y 27.

2º Los diversos informes de la autoridad responsable—fojas 23 vta. cuad. princ. y 28 vta., 30 y 31 cuad. 2º de prueb.—en los que ésta asegura que los terrenos de San Gabriel, como todos los de comunidad, están gravados con pensiones y prestaciones personales, que los constituyen en *propios* del Ayuntamiento y no de los vecinos en particular, quienes á pesar de esto, no han pagado jamás á dicha corporacion ninguna clase de pensiones, pues las que Mateos ha satisfecho son posteriores á la adjudicacion y efecto necesario de ella.

3º Los títulos—fs. 3 y siguientes, cuad. prin.—con que los agraviados justifican plenamente que todos los terrenos de San Gabriel, fueron comprados á la Corona de España, por sus antepasados, á dinero efectivo sin que en ellos

aparezca haber sido gravados con rentas, censos, obvenciones, prestaciones personales ni cosa semejante.

4º El documento auténtico—fs. 16 y siguientes del propio cuad.—en que aparece que entre los terrenos comprados, está un magueyal que desde el año de 1771 estaba destinado por los vecinos, á la reparacion de la iglesia de San Gabriel, nombrándose periódicamente por ellos mismos un administrador de él, para que en ningún tiempo fuviesen en dicho magueyal, cura, curato, cofradía ó cosa equivalente, derecho alguno, ni la menor intervencion.

5º Los documentos privados—fs. 51, 2, 45, 46, 47, 48, 49 y 50, cuad. 2º de prueb.—suscritos la mayor parte por el mismo adjudicatario, de los que resulta que hasta el año de 1857, época de la adjudicacion de que se trata, continuó la administracion del referido magueyal como en el siglo pasado, por un vecino nombrado para ello, cada año popularmente, quien invertia sus productos en la reparacion de la iglesia y fomento del culto.

6º La diligencia—de fojas 13 vta., cuad. 2º de prueb.—en la que el C. Gabriel Mateos negó ser suyas las firmas que llevan su nombre en los anteriores documentos, porque en estos está íntegro el nombre “Gabriel,” el que, en las firmas que acostumbra, como se vé en la citada diligencia, está abreviado.

7º Las diligencias—de fs. 63 frente y vta. del propio cuad.—en la que dos profesores con vista de las firmas de Mateos y de las que contienen aquellos documentos, declararon: que todas menos dos (las de fs. 48 y 49) eran exactamente iguales y procedían de la misma persona; y que dichos documentos, muy anteriores á la época de la adjudicacion, tienen la edad que representan, por lo que excluyen toda sospecha de ser antedatados.

8º Los documentos fehacientes—de fs. 61 y 65—que contienen las firmas auténticas del adjudicatario, en las que

está íntegro y no abreviado el nombre "Gabriel," lo que demuestra la falsedad con que se produjo en la diligencia de fs. 13 vuelta citada, y la mala fé con que ha procedido en este negocio.

9º El informe del presidente municipal —fs. 28 vta., cuad. citado—manifestando: que en el archivo del Ayuntamiento no existe expediente alguno sobre la adjudicación de que se trata, el que debe obrar en la Jefatura política de este Distrito, ante la cual debió Mateos haber solicitado aquella, y cuya oficina debe haber expedido el testimonio respectivo.

10º La contestación del C. Jefe político de este Distrito —fs. 45, cuad. prin.—manifestando no existir en la oficina de su cargo, expediente ni noticia alguna relativa á la expresada adjudicación.

11º El expediente original, que al fin se encontró, de la providencia reclamada —fs. 61, cuad. 2º de prueb.— el que sirve de título de propiedad al adjudicatario y del cual resulta, haber el Presidente municipal de Zempoala concedido la adjudicación sin mas requisitos, que el ocuso en que aquel la solicitó, exponiendo estar en posesión del magueyal por haberlo heredado de sus mayores, pagando en favor de su pueblo, ciertas pensiones y prestando ciertos servicios personales que él mismo valorizó en cuatro pesos cuatro reales cada año, y sin otras precauciones que el informe del juez auxiliar, suscrito por cinco testigos apoyando la solicitud del C. Mateos.

12º Los testimonios de mas de diez personas vecinos de San Gabriel y ancianos la mayor parte, —fs. 14 á 22 y 39 vta. á 44 del propio cuaderno— que acreditan la autenticidad de los documentos privados de fojas 51, 2, 45 y siguientes del 2º cuaderno de pruebas; el carácter que ha tenido siempre el magueyal en cuestión, de conformidad con dichos documentos; la suplantación de firmas en el informe del juez auxiliar que aparece

en el expediente de adjudicación, pues ni la persona que ejercía ese cargo ni los testigos Pablo Ortega y José Mateos sabían escribir, ni estos prestaron su consentimiento para estampar sus firmas en el referido informe, según han declarado; la habilidad con que el C. Mateos ocultó á los vecinos sus verdaderas intenciones de apropiarse el magueyal en cuestión, haciéndoles creer, que como la ley de desamortización era perjudicial á los intereses de la comunidad, para que no algun ambicioso lo denunciara, se lo adjudicaba él aparentemente, y manteniéndolos en esta creencia por algun tiempo, ya destinando los productos del magueyal al fomento del culto cuando fungía de depositario, ya consintiendo en el nombramiento de administradores que con posterioridad á la adjudicación hizo el pueblo.

13º La diligencia —fs. 43— en que Mateos confiesa lisa y llanamente no tener documento alguno que acreditara haber heredado de sus mayores el magueyal en cuestión y estar en posesión de él, como aseguró en su escrito de denuncia.

14º Los documentos —fs. 33, 34, 59 y 60, cuad. 2º de prueb.— presentados por el adjudicatario para justificar la posesión inmemorial que alegó, siendo los dos primeros unos certificados expedidos por simples particulares durante el presente juicio, por lo que nada valen, y los dos últimos suponen la existencia del acto reclamado pero no lo justifican y,

15º El informe del Juzgado de 1ª instancia de esta ciudad —fs. 3, cuad. 1º de prueb.— en que aparece haberse solicitado la declaración de nulidad de la adjudicación que motiva este recurso, y que dicho Juzgado absolvió á Mateos de la demanda, fundado en la misma adjudicación cuya nulidad se objetaba y contra la que ahora se reclama.

Considerando 1º: que los quejosos han acreditado que el magueyal adjudicado

pertenece á sus bienes comunales que no reconocen ningun gravámen.

2º Que los terrenos comunales ó de comunidad, en que se incluyen los de cofradía, si bien deben repartirse entre los vecinos en lotes proporcionados, están exceptuados de la denuncia y adjudicación de la ley de 25 de Junio de 1856;—supremas resoluciones núms. 57, de 17 de Setiembre, 94, de 11 de Noviembre, 129, de 20 de Diciembre de 1856, 142, de 2 de Enero de 1857, 161, de 5 de Setiembre de 1859, 173, de 29 de Abril de 1869, y muy especialmente la de 10 de Diciembre de 1862,—porqueno pertenecen á corporacion propiamente dichas, sino á individuos particulares, como sucede con todos los bienes de sociedad ó comunión;—Escribi. en su dic. artículos “Sociedad” y “bienes comunales.”—siendo esta la razon en que se ha fundado la Suprema Corte para otorgar varios amparos á los vecinos de los pueblos, contra las adjudicaciones que se han hecho de sus terrenos de comunidad, pues la propiedad, aunque esté proindivisa, no es menos cierta ni está menos protegida por el Código fundamental en su artículo 27.—Ejecutorias de 15 de Diciembre de 1869, 4 y 26 de Setiembre de 1871, y 10 de Marzo último.

3º Que, en consecuencia, la adjudicación verificada á favor del C. Mateos, violó en las personas de los vecinos de San Gabriel, la garantía del artículo 27 citado de la Constitución, siendo por demas bastante claro que perteneciendo como pertenece el referido magueyal á todos los vecinos, la providencia reclamada constituye una verdadera expropiación de la parte que toca á cada uno.

4º Que no es exacto que todos los bienes de comunidad, solo por tener este carácter como pretende el C. municipal de Zempoala, estén afectos á pensiones ó prestaciones personales que los constituyen en *propios* de algun Ayuntamiento ó pueblo, y sujetos por esta cau-

Tomo III.—Parte II.

sa á la ley de 25 de Junio; pues solo reportan estas cargas los que han sido expresa y legalmente gravados con ellas.—Ordenanzas de Intendentes, art. 34;—pero de ninguna manera los de composición, como los de San Gabriel, que fueron comprados libres de todo gravámen para usos particulares.

5º Que suponiendo que los expresados terrenos, incluso el magueyal, reportasen algunas cargas, no seria en favor de los propios del Ayuntamiento de la cabecera, que nada le costaron, sino en favor del comun del pueblo que los compró, como está bien determinado en las ordenanzas de Intendentes citadas, de que se infiere que la adjudicación hecha á Mateos para pagar al Ayuntamiento de Zempoala y no al comun de San Gabriel los réditos del valor del magueyal, equivale á apropiarse aquella de una cosa ajena, de unos bienes exclusivamente propios de este pueblo, lo que no ha querido la ley de 25 de Junio de 1856, ni lo tolera el artículo 27 de la Constitución.

6º Que tampoco puede la autoridad responsable, para reputar propios del Ayuntamiento de la Cabecera los terrenos de San Gabriel, apoyarse en el decreto del Estado de 15 de Enero de 1847 que dispuso “se cobrase á los vecinos de aquel lugar, el *cánon que pagaban el año de 1834*, mientras se daba una ley sobre *tierras comunes ó realengas*,” porque 1º: ese decreto no tuvo efecto alguno, supuesto que el *cánon* jamás se pagó como se infiere del informe de la Gefatura política de este Distrito—fojas 32, cuaderno 2º de pruebas—y de los que ha rendido el mismo Presidente Municipal; 2º: el *cánon* que se pagaba el *año de 1834*, era un abuso incalificable cometido por las autoridades de Zempoala (como los que cometen comúnmente las cabeceras para vivir á expensas de los infelices pueblos que les están sujetos), calificando infundadamente de *realengos*

6 baldíos, los terrenos comunales de San Gabriel (motivo por el que desde el año de 1820 fueron reprendidas, fojas 15 cuaderno 1º), y declarándolos comprendidos en el decreto del propio Estado, de 9 de Mayo de 1834, que adjudicó á los Ayuntamientos para sus propios, los terrenos realengos ó baldíos que existiesen en el territorio de sus Municipalidades "cuya disposición ocasionó tantos abusos, que bien pronto se derogó por el decreto de 2 de Junio de 1835, que mandó restituir los terrenos de que en virtud ó á pretexto de aquella disposición, habían sido despojados los que los poseían por algún título legítimo;" 3º: el decreto citado de 1847 en que se funda el Municipal, no concedió al Ayuntamiento de la cabecera, la propiedad de las tierras de San Gabriel, supuesto que no expresa que el canon se pagara á dicha corporación, lo que hubiera sido muy injusto, y si hace presumir que tuviera por objeto cubrir algunos gastos del pueblo en común, y 4º: aquel decreto no establece una contribucion sino que constituye un ataque á la propiedad que los vecinos tenían en los terrenos mencionados, segun los títulos que han exhibido, ataque que no pueden tolerar por mas tiempo los artículos 16 y 27 del Código fundamental.

7º Que aun en caso de no estar probado que el magueyal en cuestion pertenece á los vecinos, el acto reclamado importa un ataque á los derechos de estos, porque cuando menos hay una contienda sobre la propiedad de los terrenos de San Gabriel, entre los comuneros y el Ayuntamiento, contienda que dirimió este, por sí mismo, valido de su autoridad, enajenando parte de la cosa litigiosa al C. Mateos, por medio de una adjudicacion clandestina, supuesto que no se publicaron los avisos prevenidos por la ley de desamortizacion y su reglamento, y cuya adjudicacion privó á los vecinos del justo derecho de oponerse á ella

oportunamente para evitar que se llevara adelante y que el adjudicatario, apoyado despues en el título que se le expidió, los despojara del referido magueyal que defendian.

8º Que aunque se apure la dificultad y se suponga que el magueyal de que se trata, esté afecto á los fondos municipales, es evidente, segun los autos, que no solo el C. Mateos sino todos los vecinos de San Gabriel, estaban en posesion de él, supuesto que anual y popularmente se nombraba un administrador para invertir sus productos en el fomento del culto, y por consiguiente que todos tenían proporcionalmente derecho á la adjudicacion, derecho que no renunciaron expresa ni tácitamente, como se previene en la circular de 9 de Octubre de 1856; de que resulta, que habiéndose verificado aquella, en favor de un solo vecino, se atacaron los derechos de los demas con violacion del artículo 16 de la Constitucion.

9º Que aunque se suponga no estar suficientemente demostrado, como lo está, que el magueyal tantas veces citado pertenece á todos y cada uno de los vecinos, es evidente por lo menos que entre estos y el C. Mateos, hay una cuestion de propiedad respecto de él, y que su adjudicacion clandestina por la falta de pregones y fundada al parecer en firmas suplantadas, privó á los quejosos del derecho de oponerse á ella oportunamente, haciendo valer ante los Tribunales competentes, ya sus títulos de propiedad, ya el derecho de preferencia ó el de concurrencia á la referida adjudicacion.

10º Que cualquiera que sea el derecho del Ayuntamiento de Zempoala á los bienes adjudicados, y quienquiera que tuviere derecho á la adjudicacion, la ilegalidad del acto reclamado es manifiesta, porque no corresponde á los presidentes municipales, sino á los Jefes Políticos, otorgar las escrituras respectivas de es-

ta clase de terrenos, como previno expresamente la suprema resolución de 13 de Noviembre de 1856, para evitar precisamente la confusión, las torpezas y los abusos (son los términos de esta disposición) que como en el presente caso se cometían por las autoridades municipales.

11º Que en consecuencia, de cualquier modo que se considere el acto reclamado, constituye un ataque á las garantías individuales que otorga el Código fundamental en sus artículos 16 y 27.

12º Que el haberse solicitado de los Tribunales ordinarios y estar pendiente en ellos la resolución definitiva sobre nulidad de la adjudicación de que se trata, no impide la concesión del amparo que se ha promovido, porque 1º: al establecer los artículos 101 y 102 de la Constitución los juicios tutelares de los derechos del hombre, lo hacen de un modo absoluto sin expresar nada que pueda fundar alguna limitación, pues como ha dicho sabiamente la Suprema Corte:—Ejecut. de 10 de Agosto de 1869—para la legitimidad del recurso de amparo y la procedencia en todo momento, basta la violación de alguna de las garantías que la misma Constitución declara inviolables; 2º: como estos recursos comienzan apenas á ser conocidos en los pueblos oscuros y lejanos de los grandes centros de civilización, son bastante excusables los quejosos de no haber promovido este juicio con anterioridad y previamente á otro cualquiera, y 3º: habiéndose cometido multitud de atentados contra los intereses de los pueblos y de las clases menesterosas en general, por no haberse comprendido debidamente por las autoridades subalternas las leyes de desamortización y el espíritu de la Reforma, sería muy injusto y contraproducente demandar de ellas mismas la declaración de sus derechos y la reparación de sus perjuicios, pudiéndose ocurrir á los juicios de amparo, mas expedi-

tos y menos costosos y á otros Tribunales que presentan mejores garantías de acierto por la integridad é ilustración de las personas que en última instancia conocen de dichos recursos.

En virtud de lo expuesto, y con fundamento de las razones aducidas y de los artículos 101 y 102 de la Constitución general, se decreta: Que la Justicia de la Unión ampara y protege á los vecinos de San Gabriel representados por el O. Jesus D. Osorno, contra la adjudicación que el O. presidente municipal de Zempoala hizo el 2 de Setiembre de 1857, en favor del O. Gabriel Mateos, de un magueyal de los bienes comunales de aquel pueblo, por importar aquella providencia una violación de las garantías individuales que otorgan los artículos 16 y 27 del Pacto federal.

Hágase saber; publíquese, sáquense las copias respectivas para el "Semana-rio Judicial," y remítanse estos autos á la Suprema Corte para la revisión de esta sentencia que definitivamente juzgando pronunció y firmó el O. Miguel Mejía, juez de Distrito del Estado de Hidalgo: doy fé.—*M. Mejía.—Francisco Briseño.*

Es copia que certifico. Pachuca, Julio 29 de 1872.—*F. Briseño.*

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 24 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por D. Jesus D. Osorno, en representación de D. José Mateos, D. Félix Gutierrez, D. Francisco Mateos, D. Feliciano Reyes y D. Antonio Zavala, vecinos del Pueblo de san Gabriel, contra el alcalde municipal de Zempoala por la adjudicación que hizo á D. Gabriel Mateos de un magueyal de los quejosos, y considerando:

que en el expediente consta que el magueyal es de ellos, pues lo adquirieron por título de compra desde el año de 1713 y lo han estado poseyendo en común: que no está comprendido en la clase de bienes adjudicables y redimibles á que se refieren las leyes de reforma; que aun en el caso de que lo estuviese, la adjudicación de él hecha á D. Gabriel Mateos por el alcalde municipal de Zempoala carece de todos los demás requisitos establecidos por las mismas leyes para las adjudicaciones, y por lo mismo es nula y de ningún valor; y que por consiguiente la llamada adjudicación ataca en las personas de los quejosos las garantías que se refieren en los artículos 16 y 27 de la Constitución Federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 24 de Julio próximo pasado por el Juzgado de Distrito de Hidalgo, que declara que la Justicia de la Union ampara y protege á los vecinos de San Gabriel, representados por el C. Juan D. Osorno, contra la adjudicación que el C. presidente Municipal de Zempoala hizo el 2 de Setiembre de 1857 en favor del C. Gabriel Mateos, de un magueyal de los bienes comunales de aquel pueblo, por importar esa providencia una violación de las garantías individuales que otorgan los artículos 16 y 27 del Pacto federal.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—Pedro Ordaz.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—José Maria del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José*

García Ramirez.—Luis María Aguilar, secretario.

Son copias que certifico. México, Agosto 27 de 1872.—*Lic. Agustin Peralta,* oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Calixto Diaz, en nombre de su hijo Manuel, quien siendo juez de manzana fue consignado al servicio militar y reducido á prision por el comandante de la guardia nacional.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El fiscal dice: El C. Calixto Diaz, en representación de su hijo Manuel, ha entablado ante ese Juzgado el recurso de amparo, contra una providencia del comandante en Jefe de la guardia nacional que lo redujo á prision en la mañana del día nueve de este mes, en ocasión que se dirigia á la finca de campo que administra, siendo así que se encuentra cuotizado en la guardia nacional para quedar excepto del servicio activo de la misma; apoyando el recurso en la fracción 1ª, artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, con relacion á los artículos 19 y fracción 1ª del artículo 18 de la Constitución Federal.

La autoridad responsable, sin negar el hecho de la prision, informa: que por las circunstancias actuales, se dispuso, para guardar el orden de las poblaciones, llamar al servicio de guarnición á los cuotizados de la guardia nacional.

En su informe justificado, acompaña la disposición del Gobierno del Estado dada en virtud de facultades extraordinarias que le concedió la legislatura, por decreto del 2 de Abril, para llamar al servicio activo á los cuotizados de la guardia nacional.

El hecho capital en que se ha fundado el amparo, es la repentina detención